

ÁFRICA SUBSAHARIANA

ÁFRICA

Se profundiza el impacto de la tercera ola de COVID-19 en el continente y persiste la falta de acceso a vacunas

SUDÁFRICA

Se registran los peores disturbios en el país tras el fin del apartheid en el contexto de la peor oleada de coronavirus

ETIOPIA

El país celebra las elecciones nacionales pospuestas por la pandemia y el Gobierno declara un cese al fuego unilateral en la región de Tigray, aunque la violencia persiste

MEDITERRÁNEO Y ORIENTE MEDIO

LÍBANO

Primer ministro renuncia a formar un nuevo gobierno tras nueve meses de *impasse*, en un contexto de profunda crisis política y económica agravada por la pandemia

LIBIA

Nuevas denuncias sobre graves vulneraciones de derechos humanos de población migrante y refugiada en centros de detención y en ruta hacia Europa

SIRIA

Tras semanas de especulaciones por un posible veto ruso, el Consejo de Seguridad de la ONU aprueba mantener la operación de ayuda humanitaria en el noroeste del país

MESOAMÉRICA Y REGIÓN ANDINA

CUBA

La gestión de la pandemia por parte del Gobierno alienta las manifestaciones más importantes de las últimas décadas

HAITÍ

El asesinato del presidente agudiza la crisis política y social que atraviesa el país

MÉXICO

Un informe de Naciones Unidas sostiene que los cárteles de la droga han intensificado su actividad tras el punto álgido de la pandemia

TEMAS GLOBALES

DESPLAZAMIENTO FORZADO

ACNUR confirma un nuevo récord de personas desplazadas forzosamente a nivel global pese al contexto de COVID-19 y el cierre de fronteras

INSEGURIDAD ALIMENTARIA

Alertan sobre aumento exponencial del hambre en el mundo a causa de la pandemia, conflictos y el cambio climático



ÁFRICA SUBSAHARIANA

ÁFRICA: Se profundiza el impacto de la tercera ola de COVID-19 en el continente y persiste la falta de acceso a vacunas

ETIOPIA: El país celebra las elecciones nacionales pospuestas por la pandemia y el Gobierno declara un cese el fuego unilateral en la región de Tigray, aunque la violencia persiste

MOZAMBIQUE: En medio de la tercera ola de la pandemia el país se prepara para el despliegue de tropas extranjeras en Cabo Delgado para combatir a la insurgencia

NIGERIA: La crisis económica en el país se deteriora debido a los impactos de la pandemia y al empeoramiento de la seguridad

SUDÁFRICA: Se registran los peores disturbios en el país tras el fin del apartheid en el contexto de la peor oleada provocada por la COVID-19

ÁFRICA

Se profundiza el impacto de la tercera ola de COVID-19 en el continente y persiste la falta de acceso a vacunas

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que África se enfrenta a una tercera ola de COVID-19 cuyo ritmo de propagación está siendo más rápido que el producido durante la segunda ola en el continente. El número de caso de COVID-19 casi se ha triplicado desde finales de abril, cuando surgió la variante Delta en Uganda, registrando hasta mediados de julio cerca de 30.000 muertes en el continente. En toda África, los casos aumentaron casi un 200% entre junio y julio, y el promedio semanal de nuevas muertes diarias ha aumentado desde principios de junio. Solo en el mes de junio, en 26 países africanos se registró un 50% más de casos confirmados de COVID-19 en comparación con mayo. De esos 26 países, 17 de ellos confirmaron casos de la variante Delta, la cual se propaga un 225% más rápido que el virus original. De esta forma, en total son 22 los países africanos que han identificado dicha variante del virus originado en India.

En algunos países el ritmo de crecimiento de los contagios se ha disparado. En algunos momentos, en Mozambique, Ruanda y Malawi se registró un crecimiento del 172%, 138% y 110%, respectivamente. Asimismo, países como Namibia y Túnez están reportando más muertes per cápita que cualquier otro país del mundo. John Nkengasong, director del Centro de África para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC de África), afirmó al respecto que el continente estaba perdiendo la batalla contra el coronavirus. La OMS prevé que el aumento de la variante Delta en África causará cientos de miles de muertes en los próximos meses si no se logra un aumento espectacular de las medidas preventivas y el acceso a la vacuna. En este sentido la OMS denunció que solo el 1% de la

población africana, compuesta por 1.300 millones de personas, ha sido completamente vacunada, y que en la actualidad, 18 países han agotado casi el 80% de sus vacunas, mientras que en ocho se han agotado por completo. También denunció la falta de camas de cuidados intensivos y de oxígeno en los hospitales. Estos datos ponen la voz de alarma sobre la situación del continente africano, e incluso ponen en entredicho el modesto objetivo de la Unión Africana de vacunar al 20% de la población para fines de 2021, propósito que hoy por hoy parece inalcanzable.

- The East African, [“COVID-19 Surge: Africa Losing Battle to Brutal Third Wave”](#), *The East African*, 28 de junio de 2021.
- AFP, [“COVID Spreading in Africa at Record Pace, Says WHO”](#), AFP, 02 de julio de 2021.
- Jennifer Rigby, [“‘Silent Mass Drowning’: Call for Urgent Supply of Vaccines as Delta Variant Threatens Africa”](#), *Telegraph*, 06 de julio de 2021.
- Elliot Smith, [“COVID Cases Surge While Vaccines Stagnate in Africa, as Experts Urge Greater Global Contribution”](#), *CNBC*, 07 de julio de 2021.
- Africa Center for Strategic Studies, [“Devastating Human Toll as the Delta COVID Variant Takes Hold in Africa”](#), *ACSS*, 09 de julio de 2021.
- New York Times, [“Africa’s Covid Crisis Deepens, but Vaccines Are Still Far off”](#), *New York Times*, 16 de julio de 2021.

ETIOPIA

El país celebra las elecciones nacionales pospuestas por la pandemia y el Gobierno declara un cese el fuego unilateral en la región de Tigray, aunque la violencia persiste

El 21 de junio Etiopía celebra las elecciones generales que habían sido pospuestas en dos ocasiones debido



ÁFRICA SUBSAHARIANA

a la pandemia de la COVID-19. En ellas, el Partido de la Prosperidad del primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, consiguió una abrumadora victoria, obteniendo 410 de los 436 escaños del Parlamento federal. Sin embargo, en diez regiones del país los comicios no se pudieron celebrar, siendo postergados por motivos de seguridad y problemas de logística. Entre ellas destacó el aplazamiento sin fecha de las votaciones en la región de Tigray, debido al conflicto armado que mantiene desde noviembre de 2019 el Gobierno contra las fuerzas del Frente de Liberación del Pueblo de Tigray (TPLF por sus siglas en inglés), antiguo partido gobernante de la región. Asimismo, en la región de Oromiya, la más grande del país, los dos principales partidos de la oposición, el Congreso Federalista Oromo y el Frente de Liberación Oromo, boicotearon los comicios, denunciando la detención de sus candidatos y ataques contra sus oficinas. Los resultados electorales significaron un respaldo al Gobierno y la figura de Abiy, cuya reputación internacional ha quedado en entredicho por las acusaciones de violaciones a los derechos humanos en el conflicto de Tigray.

Hasta la fecha, el conflicto armado en Tigray ha generado el desplazamiento de dos millones de personas y ha provocado una importante crisis humanitaria en la región. La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), estimó que alrededor de 900.000 personas en la región de Tigray –compuesta por seis millones de personas– se enfrentan a condiciones de hambruna, señalándola como la peor crisis del mundo en la actualidad. Esta estimación, sin embargo, duplica la emitida a principios de junio por las Naciones Unidas, que estimaba en más de 350.000 las personas que se hallaban en grave riesgo de hambruna, señalando además otros 1,8 millones de personas al borde de la hambruna. A su vez, la ONU denunció que cerca de 5,2 millones de personas siguen necesitando asistencia humanitaria, la gran mayoría mujeres, niños y niñas, encontrándose restringido el acceso humanitario en la región. El empeoramiento de la situación humanitaria llevó a que el Consejo de Seguridad de la ONU celebrase su primera reunión pública sobre el conflicto, días después de que las fuerzas del TPLF retomaran el control de la capital regional, Mekelle, el 27 de junio. De forma paralela, y en un giro inesperado de los acontecimientos, el Gobierno nacional de Abiy Ahmed declaró el 28 de junio un alto al fuego unilateral, anunciando la retirada de las tropas del Ejército de la región. La medida supone el primer cese de hostilidades tras el inicio del conflicto armado ocho meses antes. El TPFL respondió al alto el fuego deteniendo a cerca de 7.000 soldados del Ejército nacional, quienes fueron exhibidos en las calles de Mekelle, así como exigiendo al Gobierno diferentes condiciones para sumarse al alto el fuego, entre

ellas la retirada de todas sus tropas y las sus aliados de la región norte; una investigación independiente sobre las presuntas atrocidades cometidas por tropas etíopes y eritreas; la restauración de servicios básicos como electricidad, agua, y telecomunicaciones; y el restablecimiento del gobierno del TPLF en Tigray.

Posteriormente, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó una resolución solicitando el fin inmediato de todas las violaciones a los derechos humanos en Tigray, el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario, así como la retirada verificable de las tropas eritreas que apoyan al gobierno federal. La Unión Africana (UA) también puso en marcha una investigación sobre violaciones de derechos humanos en la zona. Las resoluciones y críticas a la vulneración de los derechos humanos se producen en un contexto donde las organizaciones humanitarias siguen siendo objetivo de ataques. Uno de los más recientes fue el ataque contra un vehículo de Médicos Sin Fronteras a 90 kilómetros de Mekelle, que dejó tres trabajadores humanitarios asesinados: María Hernández, coordinadora de emergencias de España, Yohannes Halefom Reda, asistente del coordinador, y Tedros Gebremariam Gebremichael, conductor de MSF, ambos etíopes.

- AP, “Up to 900,000 in Ethiopia’s Tigray Face Famine, US Says”, *AP*, 26 de junio de 2021.
- Al Jazeera, “Over 400,000 in Tigray Suffering Famine Now, with 1.8m on Brink”, *Al Jazeera*, 3 de julio de 2021.
- Al Jazeera, “UN Urges ‘Verifiable Withdrawal’ of Eritrean Troops from Tigray”, *Al Jazeera*, 13 de julio de 2021.
- Nation, “AU Launches Investigation into Tigray Atrocities”, *Nation*, 17 de julio de 2021.
- Kaamil Ahmed, “Three AID Workers Found Dead in Tigray, Says Médecins Sans Frontières”, *The Guardian*, 25 de junio de 2021.

MOZAMBIQUE

En medio de la tercera ola de la pandemia el país se prepara para el despliegue de tropas extranjeras en Cabo Delgado para combatir a la insurgencia

El país se ha visto afectado por la tercera ola de la pandemia de la COVID-19 y la llegada de la variante Delta al continente africano, registrando un incremento de casos, en algunos momentos, del 172%. Asimismo, según datos del Africa Center for Strategic Studies, Mozambique registró un aumento de la mortalidad de un 465% entre el 7 de junio y el 7 de julio, contabilizando 96 muertes, frente al periodo que va del 8 de mayo al 7 de junio, cuando se produjeron 17 muertes debido a la



ÁFRICA SUBSAHARIANA

COVID-19. Paralelamente el norte del país, en la región de Cabo Delgado, se mantiene la crisis humanitaria generada por el conflicto armado en la región iniciado a finales de 2017. En este sentido, la agencia de la ONU para los refugiados (UNHCR) informó el 11 de junio que alrededor de 70.000 personas habían sido desplazadas de la ciudad de Palma desde el 24 de marzo, momento en el que se produjo una ofensiva militar por parte de organizaciones yihadistas. En total, UNHCR eleva a casi 800.000 el número total de personas desplazadas en Cabo Delgado desde que inició la violencia, que además ha dejado un saldo de unas 3.000 personas asesinadas. Asimismo, el Programa Mundial de Alimentos de la ONU denunció que casi un millón de personas necesitan ayuda alimentaria en la región.

Como respuesta al deterioro de la situación de seguridad y humanitaria en Cabo Delgado, el bloque regional Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC por sus siglas en inglés), compuesto por los 16 países de la región, celebró el 23 de junio su tercera Cumbre Extraordinaria de jefes de Estado y de Gobierno en Maputo. En ella, el organismo regional, además de abordar temas relativos a la seguridad alimentaria y nutricional regional, aspectos de género y desarrollo, así como debatir una respuesta regional al VIH/SIDA y al incremento de casos de la COVID-19, aprobó también el despliegue de una fuerza de reserva de la SADC en Cabo Delgado para ayudar a Mozambique a contener la creciente crisis, así como instó a que se brinde asistencia humanitaria. La SADC, sin embargo, no facilitó detalles sobre el tamaño de la fuerza o sobre su despliegue en el país, aunque a principios de año, un grupo de expertos militares del grupo habían recomendado un contingente de alrededor de 3.000 soldados, provistos de armamento, helicópteros, aviones y capacidad naval. Un día después del anuncio de la SADC, Ruanda también comunicó que desplegará tropas en Cabo Delgado a petición del Gobierno mozambiqueño presidido por Felipe Nyusi, anunciando una misión compuesta por 1.000 soldados para ayudar al país a combatir el “terrorismo”. Si bien el contingente ruandés inició su despliegue en el país a principios de julio, la fuerza de reserva de la SADC a mediados de julio aun no contaba con la autorización del Gobierno de Mozambique para comenzar a desplegarse en la provincia de Cabo Delgado, debido a la falta de acuerdo sobre el estatuto de las fuerzas, así como a diferencias al interior de la SADC sobre qué país debería liderar la misión. Del mismo modo, la SADC mostró su desacuerdo con el despliegue unilateral de tropas de Ruanda, ya que esperaba que dicha fuerza estuviera bajo un mandato único de la SADC. De forma paralela, la UE, a solicitud del gobierno de Mozambique, aprobó una misión de entrenamiento militar en el país para ayudar a entrenar a las fuerzas armadas mozambiqueñas en

la lucha contra los yihadistas en Cabo Delgado. En un comunicado el Consejo Europeo detalló que la misión tendrá, previsiblemente, un mandato de dos años. Josep Borrell, jefe de política exterior de la UE, informó que el organismo podría desplegar entre 200 y 300 formadores en Mozambique antes de que finalice el año –sin detallar que países europeos proporcionarían tropas– que se unirán a los 60 soldados ya enviados por Portugal.

- Africa Center for Strategic Studies, “[Devastating Human Toll as the Delta COVID Variant Takes Hold in Africa](#)”, ACSS, 09 de julio de 2021.
- DefenceWeb, “[Maputo Hosts Three SADC Meetings with Terrorism an Agenda Item](#)”, *DefenceWeb*, 21 de junio de 2021.
- Andrew Meldrum, “[Southern African Leaders Agree to Send Troops to Mozambique](#)”, *AP*, 23 de junio de 2021.
- The Defense Post y AFP, “[EU Agrees Military Training Mission for Mozambique](#)”, *The Defense Post*, 30 de junio de 2021.
- Peter Fabricius, “[Rwanda’s Deployment of Forces into Mozambique Irks SADC](#)”, *Daily Maverick*, 11 de julio de 2021.
- Reuters, “[EU Agrees to Send Military Training Mission to Mozambique](#)”, *Reuters*, 12 de julio de 2021.

NIGERIA

La crisis económica en el país se deteriora debido a los impactos de la pandemia y al empeoramiento de la seguridad

En la última actualización semestral realizada por el Banco Mundial (BM) sobre el estado del crecimiento económico en Nigeria, el organismo destacó una desaceleración del crecimiento y un aumento de la pobreza provocado por el impacto de la pandemia y el aumento de la inseguridad en el país. El BM prevé un ritmo de crecimiento del PIB para Nigeria del 1,9% en 2021 y del 2,1% en 2022, cifras que contrastan con el 3,4% previsto para este año y el 4,0% para 2022 para el conjunto de África subsahariana. De forma específica, el informe señala el incremento de la pobreza y de la inseguridad alimentaria en el país debido a la inflación en los precios de los alimentos, que supone casi el 70% del aumento total de la inflación en Nigeria durante el año pasado. Asimismo, resaltó que la crisis inducida por la pandemia de la COVID-19 empujará a más de 11 millones de nigerianos a la pobreza en el año 2022, elevando el número total de personas clasificadas como pobres en el país a más de 100 millones de un total de 200 millones de personas. Si bien los desafíos económicos son generalizados, preocupa significativamente el aumento del desempleo juvenil, que se ha cuadruplicado desde 2015 para convertirse en uno de los peores a nivel mundial, en un país donde la media de edad se sitúa en los 18 años. Según datos de



ÁFRICA SUBSAHARIANA

la Oficina de Estadísticas de Nigeria (NBS), casi la mitad de los nigerianos menores de 35 años en edad laboral están desempleados o subempleados. El aumento de la inseguridad en el país, debido a los múltiples escenarios de conflictividad armada en varias regiones, así como al aumento de la violencia criminal, representa un importante lastre para el crecimiento y la creación de empleo.

En este sentido, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), señaló en un informe presentado en junio sobre la guerra en el norte de Nigeria y su impacto en los medios de vida, que el conflicto armado presente desde hace 12 años --que en la actualidad enfrenta al Gobierno nigeriano y sus aliados regionales con las insurgencias islamistas de Boko Haram y la Provincia de África Occidental del Estado Islámico--, ha provocado la muerte de unas 350.000 personas --314.000 debidas a causas indirectas--, la gran mayoría de las cuales son niños y niñas menores de cinco años. Estos datos representan una estimación 10 veces más alta que las anteriores que registraban alrededor de 35.000 muertes basadas solo en los fallecimientos producidos en combates. Según el PNUD, el coste humano total de la guerra es mucho mayor, debido a que la inseguridad ha provocado una disminución en la producción y el comercio agrícola, reduciendo el acceso a los alimentos y amenazando a muchos hogares que dependen de la agricultura para su sustento. Asimismo, la violencia en la región ha provocado el desplazamiento de más de dos millones de personas de sus hogares, provocando una de las peores crisis humanitarias del mundo, con millones de personas que dependen de la ayuda y asistencia.

5

- Reuters, “[Nigerian Growth Lags Africa, Poverty Rising, Says World Bank](#)”, *Reuters*, 15 de junio de 2021.
- Akinwotu, Emmanuel, “[Young, Qualified and Barely Scraping by – Inside Nigeria’s Economic Crisis](#)”, *The Guardian*, 14 de junio de 2021.
- Al Jazeera, “[Northeast Nigeria Conflict Killed More than 300,000 Children: UN](#)”, *Al Jazeera*, 24 de junio de 2021.
- Reuters, “[Northeast Nigeria Insurgency Has Killed Almost 350,000 – UN](#)”, *Reuters*, 24 de junio de 2021.

SUDÁFRICA

Se registran los peores disturbios en el país tras el fin del apartheid en el contexto de la peor oleada provocada por la COVID-19

Al deterioro de la crisis sanitaria en el país se suma el clima de tensión política y violencia generado tras el encarcelamiento del ex presidente Jacob Zuma. Desde mediados de junio el país se ha visto sacudido por una tercera ola de COVID-19 provocada por la variante Delta, que ha derivado en un aumento de hospitalizaciones

y que amenaza con colapsar el sistema de salud en varias partes del país. Como respuesta, el gobierno sudafricano decretó nuevas restricciones para tratar de controlar la pandemia, que incluyeron toque de queda, cierre de escuelas, prohibición de venta de alcohol, etc. A este nuevo escenario, que sigue incidiendo en la crisis económica que atraviesa el país, se sumó a principios de julio el estallido de una importante crisis política tras la detención y encarcelamiento del expresidente Jacob Zuma, después de que la Corte Suprema de Sudáfrica lo condenara a 15 meses de prisión por desacato. El encarcelamiento de Zuma --que representa la primera vez que un expresidente enviado a prisión en Sudáfrica tras el fin del apartheid-- desató una oleada de protestas que tuvieron su origen en la provincia de KwaZulu-Natal, de donde es originario Zuma, y se extendieron a otros puntos del país, principalmente a la capital Johannesburgo.

Las protestas derivaron en una ola de violencia, disturbios y saqueos a comercios y centros comerciales que afectaron principalmente a las ciudades de Durban (KwaZulu-Natal) y Johannesburgo y Pretoria (provincia de Gauteng). La situación llevó al Gobierno a desplegar a 25.000 efectivos del Ejército en estas dos provincias, las dos más densamente pobladas de Sudáfrica. Como consecuencia de la violencia, que el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa describió como la peor registrada en el país en los 27 años transcurridos desde el fin del régimen del apartheid, a mediados de julio al menos 212 personas habían perdido la vida según datos oficiales y de más de 2.500 personas habían sido detenidas. Asimismo, autoridades sanitarias del país alertaron de los impactos de los disturbios en la crisis sanitaria, que han afectado al programa de vacunación y han bloqueado la entrada de insumos sanitarios que se importan a través del puerto de Durban. Si bien las protestas tuvieron como detonante la detención de Zuma, estas también se deben al impacto de la crisis económica en el país, sobre todo al desempleo de los jóvenes, así como a las nuevas restricciones provocadas por una tercera ola de la pandemia. Sudáfrica ha sido el país más afectado por la epidemia sanitaria en todo el continente africano, con un total acumulado de más de 1,7 millones de infecciones, incluidas 57.000 muertes, lo que representa casi el 40% del total de casos confirmados en África.

- Magome, Mogomotsi, “[Fighting COVID-19 Surge, South Africa Increases Restrictions](#)”, *AP*, 15 de junio de 2021.
- Al Jazeera, “[South Africa Deploys Army in Two Provinces to Quell Protests](#)”, *Al Jazeera*, 12 de Julio de 2021.
- Burke, Jason, “[South Africa: More than 70 Dead as Unrest Linked to Zuma Jailing Intensifies](#)”, *The Guardian*, 13 de Julio de 2021.
- Rogan Ward, Siyabonga Sishi, “[South African Crowds Rampage, Hospital Operations Disrupted](#)”, *Reuters*, 13 de Julio de 2021.



MEDITERRÁNEO Y ORIENTE MEDIO

LÍBANO: Primer ministro renuncia a formar un nuevo gobierno tras nueve meses de *impasse*, en un contexto de profunda crisis política y económica agravada por la pandemia

LIBIA: Nuevas denuncias sobre graves vulneraciones de derechos humanos de población migrante y refugiada en centros de detención y en ruta hacia Europa

SIRIA: Tras semanas de especulaciones por un posible veto de Rusia, el Consejo de Seguridad de la ONU aprueba mantener la operación de ayuda humanitaria en el noroeste del país

ORIENTE MEDIO: OMS alerta del riesgo de incremento de COVID-19 en el Norte de África y Oriente Medio

LÍBANO

Primer ministro renuncia a formar un nuevo gobierno tras nueve meses de *impasse*, en un contexto de profunda crisis política y económica agravada por la pandemia

Tras meses de infructuosos esfuerzos por formar gobierno, el primer ministro libanés renuncia a la posibilidad de conformar un nuevo gabinete. Saad Hariri anunció su dimisión a mediados de julio, nueve meses después de haber sido designado en el cargo, en un contexto de profundos desacuerdos y acusaciones cruzadas con el presidente libanés Michel Aoun, líder de la comunidad cristiano-maronita y aliado de Hezbollah. Las críticas de Aoun a Hariri apuntaron a una evasión de responsabilidades, mientras que el entonces primer ministro insistió en acusar al mandatario de estar secuestrado por las ambiciones personales de su yerno y líder del partido cristiano Free Patriotic Movement, Jibril Bassil. Hariri, dirigente de la comunidad suní del país, había sido designado como primer ministro en octubre pasado tras la renuncia de su predecesor, Hassan Diab, en un contexto de crisis política, económica y social sin precedentes en el país, agravada por el contexto de pandemia y por la explosión que el verano pasado devastó el puerto de Beirut y parte importante de la capital libanesa.

Este nuevo capítulo en la profunda crisis política libanesa agudiza aún más el clima de incertidumbre, en un contexto de acusado declive económico. Los datos del Banco Mundial apuntan a que la depresión que vive el país es una de las más grave de la historia moderna. La moneda local, la lira libanesa, ha perdido un 90% de su valor en dos años y las tasas de pobreza se han incrementado significativamente. Tras la renuncia de Hariri, manifestantes salieron a las calles y bloquearon varias avenidas, principalmente en las áreas suníes de Beirut. En un clima de hartazgo y decepción, las protestas derivaron en enfrentamientos con el Ejército en los que resultaron heridas decenas de personas. En las semanas previas se habían registrado

otras movilizaciones y huelgas por el deterioro en las condiciones de vida y en respuesta a medidas como el alza en el precio del pan y de los combustibles. Este clima de convulsión en el país coincide con los indicadores sobre un nuevo incremento de casos de COVID-19 derivados de la expansión de la variante Delta. Una nueva oleada podría llevar al límite el ya frágil y saturado sistema de salud libanés, que enfrenta una situación crítica. Se esperaba que las consultas para escoger un nuevo primer ministro comenzaran a finales de julio. De acuerdo con el sistema político libanés, este cargo debe ser ocupado por una persona de la comunidad musulmana suní. Francia albergará una nueva conferencia internacional de ayuda a Líbano con el apoyo de Naciones Unidas el 4 de agosto, en el primer aniversario de la explosión de Beirut.

- Houshig Kaymakamian, “[Fears a new COVID wave could overwhelm Lebanon’s health system](#)”, *Al Jazeera*, 17 de julio 2021.
- News Wires, “[Lebanon’s PM-designate Hariri abandons effort to form new government](#)”, *France 24*, 15 de julio 2021.
- Radio France International, “[Liban: “heurts à Beyrouth après le renoncement de Saad Hariri](#)”, *RFI*, 15 de julio 2021.
- Radio France International, “[France announces aid conference to help crisis-hit Lebanon](#)”, *RFI*, 16 de julio 2021.
- Reuters, “[Lebanon says consultations on new government will start next week](#)”, *Reuters*, 19 de julio 2021.

LIBIA

Nuevas denuncias sobre graves vulneraciones de derechos humanos de población migrante y refugiada en centros de detención y en ruta hacia Europa

Las organizaciones Amnistía Internacional y MSF presentan nuevas informaciones sobre los gravísimos abusos a los que se somete a la población migrante



MEDITERRÁNEO Y ORIENTE MEDIO

y refugiada en Libia tanto en las operaciones de intercepción en su camino a Europa como en los centros de detención en el país norteafricano. En el caso de MSF, las evidencias sobre hechos de violencia motivaron que la entidad suspendiera sus actividades en dos centros de detención, después de que personal médico de la organización presenciara palizas y tratara a numerosos pacientes afectados por fracturas y cortes producto de los golpes infligidos por los guardias libios. MSF denunció asimismo que los centros de detención se encuentran cada día más abarrotados, teniendo en cuenta el incremento de las intercepciones en el mar. Solo en la primera mitad de 2021 se habían capturado a unas 15.000 personas, más que en todo el año 2020, en operaciones que la Guardia Costera libia cataloga como “misiones de rescate”.

Amnistía Internacional, en tanto, publicó en julio un nuevo informe documentando situaciones de abusos, hambre, extorsiones, golpes, violencia sexual y trabajos forzados en las instalaciones libias. La investigación de Amnistía Internacional está basada en testimonios recabados entre enero de 2020 y junio de 2021 e incluye hechos como coerciones sexuales a cambio de agua, tiroteos con resultado de muerte y heridas, o denegación de atención médica con resultado de muerte en casos que también afectaron a menores de edad. Amnistía insiste en apelar al desmantelamiento de estos centros, en la actualidad bajo el alero de la Dirección para el Combate de la Migración Ilegal (DCIM, por sus siglas en inglés) y denuncia el comportamiento de la guardia costera libia, acusada de abusos y acciones negligentes. Adicionalmente, señala la responsabilidad de diversos actores, en particular europeos, por no socorrer a personas migrantes y refugiadas en riesgo. Pese a que estos antecedentes y las numerosas denuncias por violaciones a los derechos humanos en los últimos años confirman que Libia no es un destino seguro, la UE ha mantenido su política de colaboración con las autoridades e instituciones libias para interceptar y retornar al país norteafricano a las personas migrantes y refugiadas que intentan llegar a las costas europeas por la ruta del Mediterráneo central. El informe de Amnistía también pone en evidencia los efectos de la pandemia en este ámbito. Las restricciones de acceso a los centros de detención a causa de la COVID-19 han supuesto una gran disminución del número de visitas e inspecciones por parte de ACNUR y otras agencias de la ONU –63 hasta junio de 2021, frente a 264 en 2020 y 1.351 en 2019–, situación que estaría favoreciendo los abusos en un clima de impunidad.

- Amnesty International, *Libya: ‘No One Will Look for You’: Forcibly Returned From Sea To Abusive Detention In Libya*, 15 de julio 2021.

- Kaamil Ahmed, “Violence towards refugees at Libyan detention centres forces MSF to pull out”, *The Guardian*, 24 de junio 2021.
- Sarah Johnson, “Fresh evidence of violence at Libyan detention centres as boats turned back”, *The Guardian*, 15 de julio 2021.

SIRIA

Tras semanas de especulaciones por un posible veto de Rusia, el Consejo de Seguridad de la ONU aprueba mantener la operación de ayuda humanitaria en el noroeste del país

El 10 de julio el Consejo de Seguridad de la ONU decide prorrogar por un año más la operación de ayuda humanitaria que permite la entrega de asistencia vital para más de 3,4 millones de personas en el noroeste de Siria, entre ellas cerca de un millón de menores de edad. La resolución, aprobada por unanimidad, da luz verde para continuar utilizando el paso de Bab al-Hawa, en la frontera turco-siria, la única vía abierta para la ayuda humanitaria tras el cierre de otros tres pasos fronterizos en los últimos tres años. En las semanas previas a la decisión del Consejo de Seguridad trascendieron las discusiones y especulaciones por la posición de Rusia, que amenazó con usar su poder de veto para cerrar todos los pasos fronterizos que permiten acceder a áreas que se encuentran fuera del control del gobierno sirio. Moscú ha insistido que toda la ayuda humanitaria debería ser coordinada a través de sus aliados en Damasco. Trabajadores humanitarios habían alertado que el cierre del paso de Bab al-Hawa sería una catástrofe. Un grupo de 42 ONG hizo pública una declaración en la que advirtió que la no aprobación de la resolución pondría en riesgo la entrega de alimentos básicos a 1,4 millones de personas, además de la provisión de suministros médicos clave y la continuidad de la incipiente campaña de vacunación contra la COVID-19 para la población del noroeste de Siria, iniciada en junio.

La región noroeste alberga a un gran número de personas desplazadas internas, en su mayoría mujeres y menores, que se han visto forzadas a huir varias veces debido a la violencia, ya que el alto el fuego vigente es vulnerado de manera periódica. La declaración de las ONG había demandado la reapertura para la ayuda humanitaria de los pasos de Bab al-Salam y Al-Yarubiyah, ambos en el noroeste, para garantizar la asistencia a la población y dar una respuesta más efectiva a la pandemia. En esta línea, recordó que 81% de la población del noroeste y 69% de noreste necesitaban asistencia y que los niveles de malnutrición se están disparando entre los menores de cinco años. Tras una década de conflicto armado, las



MEDITERRÁNEO Y ORIENTE MEDIO

estimaciones apuntan a que la población necesitada de ayuda humanitaria en Siria se encuentra en su más alto nivel, con cerca de 13 millones de personas, un 30% más que en 2014. En el último año la crisis económica, el aumento en los precios de los alimentos y la COVID-19 han amplificado las necesidades y vulnerabilidades de la población, en especial en el noroeste. Paralelamente, cabe destacar que en los últimos dos meses las hostilidades continuaron en Siria, con los principales focos de violencia en la provincia de Idlib (noroeste), en Manbij (noreste) y en el área desértica del centro del país. Solo en Idlib los ataques gubernamentales en las primeras semanas de junio habían provocado nuevos desplazamientos forzados de cerca de 5.000 personas, tras ofensivas que afectaron varias infraestructuras civiles –incluyendo un hospital– y que dejaron al menos 31 víctimas mortales.

- Bethan McKerman, “Assad forces’ shelling in Syria causes 5,000 civilians to flee”, *The Guardian*, 23 de junio 2021.
- Bethan McKerman & Hussein Akoush, “‘It will be a catastrophe’: fate of Syria’s last aid channel rests in Russia’s hands”, *The Guardian*, 9 de julio 2021.
- Reliefweb, “Over 1 million people at risk of hunger in Syria if cross-border aid resolution not renewed, say aid groups”, *Reliefweb*, 10 de junio de 2021.
- UN, “Syria: UN chief welcomes Security Council

[extension of vital cross-border aid operation”, UN News](#), 9 de julio 2021.

ORIENTE MEDIO

OMS alerta del riesgo de incremento de COVID-19 en el Norte de África y Oriente Medio

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte sobre el riesgo de incremento de casos en varios países de Oriente Medio y el Norte de África, teniendo en cuenta las aún bajas tasas de vacunación, la expansión de la variante Delta y una cierta relajación en las medidas de prevención. Tras detectar un descenso en el número de casos durante dos meses, en julio se ha detectado un importante incremento de casos de coronavirus en países como Libia, Irán, Iraq y Túnez y datos que apuntaban a una tendencia similar en casos como Marruecos y Líbano. La OMS advirtió sobre las graves consecuencias de un aumento de casos en la región y apuntó a la posibilidad de que las celebraciones de la festividad musulmana del Eid al-Adha pudieran contribuir a los contagios. Según la OMS Túnez es el país con mayores tasas de mortalidad per cápita a causa la pandemia en la región y en todo África.

- Al Jazeera, “Risk of ‘catastrophic’ coronavirus surge in Middle East: WHO”, *Al Jazeera*, 14 de julio 2021.



MESOAMÉRICA Y REGIÓN ANDINA

COLOMBIA: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos advierte que persisten lógicas del conflicto armado en la respuesta del Estado a las protestas de los últimos meses

COLOMBIA: Un informe alerta de que el conflicto armado se recrudeció en varias partes del país durante las protestas contra el Gobierno

CUBA: La gestión de la pandemia por parte del Gobierno alienta las manifestaciones más importantes de las últimas décadas

HAITÍ: El asesinato del presidente agudiza la crisis política y social que atraviesa el país

HONDURAS: Los homicidios se incrementan en más de un 16% en el primer semestre de 2021

MÉXICO: Un informe de Naciones Unidas sostiene que los cárteles de la droga han intensificado su actividad tras el punto álgido de la pandemia

COLOMBIA

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos advierte que persisten lógicas del conflicto armado en la respuesta del Estado a las protestas de los últimos meses

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el 7 de julio un informe acerca de la gestión gubernamental de las protestas que se iniciaron a finales de abril, en el que se incluyen más de 40 recomendaciones y que se fundamenta en la visita que hizo la CIDH al país a principios de junio. Entre otras cuestiones, el informe advierte sobre la persistencia de lógicas de conflicto armado en la interpretación y respuesta a las movilizaciones sociales que se han registrado en el país desde finales de abril, las más importantes de las últimas décadas. Según algunas organizaciones colombianas, en el transcurso de dichas protestas alrededor de 80 personas han muerto, más de mil han resultado heridas y muchas más han resultado detenidas. De hecho, según la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, desde el 28 de abril hasta el 16 de junio hubo denuncias por la muerte de 56 personas (54 civiles y dos policías), ocurridas principalmente en Cali, así como 49 denuncias sobre violencia sexual. En esta línea, la organización Temblores ONG señaló que como mínimo 44 víctimas mortales eran atribuibles a los cuerpos de seguridad del Estado. Por otra parte, el informe de la CIDH constató el uso de armas de fuego en la contención de las protestas y recomendaba la prohibición efectiva del uso de la fuerza letal en la gestión de movilizaciones sociales. La CIDH también recomendó la separación de la Policía Nacional y su Escuadrón Móvil Antidisturbios del Ministerio de Defensa para garantizar un enfoque ciudadano y de derechos humanos y, a la vez, evitar una perspectiva miliar en la gestión de la seguridad

ciudadana. En este sentido, algunos analistas sostienen que la subordinación de la Policía al Ministerio de defensa correspondía a un contexto político y social que ya había sido superado. Por otra parte, el informe de la CIDH también constata la utilización de violencia de género como instrumento de represión contra niñas, mujeres y personas LGBTI y, en ese sentido.

Por su parte, la vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, señaló que las protestas que ha vivido recientemente el país están vinculadas con la pandemia de la COVID-19 y no con el incumplimiento del Acuerdo de Paz o los retrasos y dificultades en su implementación, tal y como habían señalado algunas voces. Durante una sesión especial sobre Colombia del Consejo de Seguridad de la ONU celebrada a mediados de julio, Ramírez, alegó que las mencionadas protestas tenían que ver con el incremento de la pobreza en el país, subrayando que en otros países también ha habido manifestaciones similares a las de Colombia. En cuanto a las acusaciones de uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la contención de dichas protestas, Ramírez lamentó el número de personas fallecidas en el marco de las mismas, pero a la vez señaló que en solamente 1.400 de los casi 15.000 episodios de protesta hubo algún tipo de intervención de la fuerza pública. Sin embargo, algunas organizaciones de derechos humanos acusan al Estado de haber respondido con excesiva violencia a las manifestaciones. Ramírez también puso en valor los esfuerzos del Gobierno en la implementación del acuerdo de paz, señalando que para abril de 2021 casi 14.000 se habían desvinculado de las antiguas FARC, de las que el 99,1% contaba con cobertura médica y el 87,2% con acceso a una pensión. En la misma línea, el presidente Iván Duque señaló que, a pesar del enorme impacto de la pandemia, se habían realizado



MESOAMÉRICA Y REGIÓN ANDINA

avances importantes en la implementación del acuerdo de paz, como el acceso a programas sociales para ex combatientes. Sin embargo, señaló que la plena implementación del acuerdo está previsto que dure alrededor de 20 años y que se prolongue durante cuatro gobiernos consecutivos.

- France24, “La CIDH se pronuncia por el “uso excesivo y desproporcionado de la fuerza” en Colombia”, *France24*, 7 de julio de 2021.
- BBC, “El duro informe de la CIDH sobre las protestas en Colombia que Iván Duque rechaza”, *BBC*, 7 de julio de 2021.
- Anadolu Agency, “Canciller de Colombia ante la ONU: Las protestas no obedecen al incumplimiento del Acuerdo de Paz sino a la pandemia”, *Anadolu Agency*, 14 de julio de 2021.
- Semana, “Duque afirmó que la implementación del proceso de paz con exFarc tardaría 20 años”, *Semana*, 15 de junio de 2021.

COLOMBIA

Un informe alerta de que el conflicto armado se recrudeció en varias partes del país durante las protestas contra el Gobierno

Un informe de la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre el impacto de las protestas antigubernamentales iniciadas a finales de abril sobre el llamado Sistema Integral para la Paz (que incluye a la JEP y a organismos como la Comisión de la Verdad o la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas) señala que entre el 28 de abril y el 30 de mayo se incrementaron los episodios relacionados con el conflicto armado, con una importante afectación sobre la población civil. Según dicho informe, en 2021 se registraron 13 episodios de conflicto armado y 89 afectaciones a población civil. Respecto de este último dato, en años anteriores se registró una media de 18 afectaciones sobre población civil, lo cual implica un incremento de más del 400% en 2021. Según este informe, se ha producido un importante aumento de las amenazas de muerte, homicidios a excombatientes de las FARC-EP y eventos de desplazamiento forzado. El informe también señala que durante las protestas se registraron prácticas de autodefensa y paramilitarismo por parte de grupos de civiles armados en como mínimo 27 ciudades del país y a la vez expresa preocupación por el impacto que este fenómeno pueda tener en términos de recuperación del monopolio legítimo de la violencia por parte del Estado. En el mes de marzo, el Comité Internacional de la Cruz Roja ya había emitido un informe en el que advertía sobre el incremento de la violencia en varias partes del país durante la pandemia.

- El País, “El conflicto armado en Colombia se recrudeció durante las protestas”, *El País*, 2 de julio de 2021.
- Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz, *Gravedad de la situación de derechos humanos en Colombia. El caso del paro nacional y sus repercusiones sobre el Sistema Integral para la Paz (28 de abril al 30 de mayo de 2021)*, junio de 2021.

CUBA

La gestión de la pandemia por parte del Gobierno alienta las manifestaciones más importantes de las últimas décadas

Decenas de miles de personas participan en varias partes del país en las que han sido consideradas las protestas más multitudinarias en el país en las últimas décadas. Según varios medios de comunicación y analistas, las causas de dichas protestas son muy diversas e incluyen, entre otros factores, la escasez de alimentos y de otros productos básicos, los cortes eléctricos, la precariedad económica del país, las restricciones de derechos fundamentales como los de expresión y reunión, la falta de libertades y estándares democráticos, o la gestión gubernamental de la pandemia de la COVID-19 y un cierto desabastecimiento de vacunas. Según algunos análisis, aún si en términos comparativos respecto de otros países latinoamericanos Cuba había conseguido contener la expansión de la pandemia e incluso había fabricado dos vacunas contra el coronavirus, en los últimos meses se estaba registrando un rebrote muy importante en varias partes del país (especialmente en la provincia de Matanzas) que amenazaba con provocar el colapso del sistema sanitario en algunas localidades. Según algunos datos, el mismo día que se iniciaron las protestas (11 de julio), se había producido un récord en cuanto al número de nuevos contagios (casi 7.000) y de muertes por COVID-19 (47).

Las manifestaciones se iniciaron principalmente en las localidades de San Antonio Baños (cerca de la capital) y en Palma Soriano (en la provincia de Santiago de Cuba), pero en los días siguientes se extendieron rápidamente a otras partes del país e incluso a terceros países con una importante comunidad de origen cubano. A mediados de julio, la organización Cuba Decide denunció que cinco personas habían muerto en el transcurso de las protestas, aunque el Gobierno cubano solamente reconoció una víctima mortal. Amnistía Internacional señaló que tenían constancia de la detención y/o desaparición de como mínimo 140 personas, aunque algunas organizaciones como Prisoners Defenders elevaban dicha cifra a más de 180. Tanto Amnistía Internacional como Human Rights Watch también advirtieron sobre



MESOAMÉRICA Y REGIÓN ANDINA

el uso excesivo de la fuerza policial y militar en la contención de las protestas. La Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, también criticó el uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad del Estado e instó a que el Gobierno garantice los derechos de reunión y de expresión. En la misma línea, tanto la OEA como la UE, así como numerosos gobiernos, instaron a Cuba a garantizar las manifestaciones pacíficas y a atender a las demandas de los manifestantes. El presidente de EEUU, Joe Biden, calificó a Cuba de estado fallido, mientras que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, consideró al régimen cubano como una dictadura. Algunas organizaciones de derechos humanos también criticaron hostigamiento contra periodistas y criticaron los cortes de internet y las restricciones a la telefonía móvil impuestas por el Gobierno. Por su parte, la Guardia Costera de EEUU señaló que durante 2021 se habían interceptado a unas 500 personas de nacionalidad cubana intentando alcanzar la costa estadounidense, una cifra claramente superior a la años anteriores (313 en todo el 2019 y 259 en 2018), pero todavía lejos de la primera mitad de los años noventa, en la que miles de personas abandonaron la isla en botes tras el deterioro de las condiciones socioeconómicas en Cuba.

11

Por su parte, el Gobierno negó varias de las mencionadas acusaciones, criticó la desinformación y manipulación informativa sobre lo que estaba sucediendo realmente en el país y señaló que las protestas estaban alentadas por parte de EEUU. También señaló que las restricciones comerciales impuestas por dicho país son parcialmente responsables del malestar social que existe en la sociedad cubana. Cabe mencionar que varios países también instaron al Gobierno de EEUU a eliminar las medidas comerciales o de otro tipo que puedan acabar teniendo un impacto negativo en el bienestar de la población cubana. En este sentido, en el mes de junio la Asamblea General de Naciones Unidas condenó por amplia mayoría por 29ª vez el llamado embargo o bloqueo comercial de EEUU sobre Cuba. Según algunos analistas, la Administración de Joe Biden todavía no ha suspendido ni revertido las medidas económicas decretadas por el Gobierno de Donald Trump, consideradas por algunos medios como las más severas de las últimas décadas. Además de la contención de las protestas por parte de los agentes de la fuerza pública, el Gobierno instó a sus simpatizantes a manifestarse en aquellos lugares en los que había convocadas manifestaciones antigubernamentales, lo que a su vez incrementó la tensión en el país.

- El País, “¿Qué está pasando en Cuba? Las claves para entender las protestas contra el Gobierno”, *El País*, 13 de julio de 2021.
- CNN, “¿Qué está pasando en Cuba? Protestas,

crisis económica y el impacto de covid-19”, *CNN*, 15 de julio de 2021.

- BBC, “Protestas en Cuba: Díaz-Canel responde a las declaraciones de Biden y participa junto a Raúl Castro en un «acto de reafirmación revolucionaria», *BBC*, 17 de julio de 2021.
- BBC, «Estados Unidos no va a levantar el embargo sin que Cuba ceda o venga a la mesa a negociar en buena fe», *BBC*, 13 de julio de 2021.
- VOA, “Un muerto y más de 100 detenidos tras protestas: ¿Qué está pasando en Cuba?”, *VOA*, 14 de julio de 2021.
- ABC, “Más de 100 desaparecidos, varios muertos y bloqueo de comunicaciones en Cuba, según ONGs”, *ABC*, 17 de julio de 2021.

HAITÍ

El asesinato del presidente agudiza la crisis política y social que atraviesa el país

El presidente de Haití, Jovenel Moïse, es asesinado tras un ataque a su domicilio en el que su mujer también resultó herida y hospitalizada en EEUU. Poco después del magnicidio, la Policía inició un operativo de búsqueda y captura contra el grupo no identificado de personas que perpetraron el ataque, en el que, tras varias horas de tiroteos y enfrentamientos, 18 ex militares colombianos fueron detenidos, otros cuatro murieron, tres resultaron heridos y otros cinco consiguieron escapar y siguen prófugos. Además, la Policía liberó a tres personas que habían sido tomadas como rehenes y además procedió a la detención de dos personas del equipo de seguridad y protección de Moïse. También fue detenido el médico y pastor haitiano Christian Emmanuel Sanon, afincado desde hace tiempo en Florida (EEUU), considerado por las autoridades haitianas el principal responsable político e intelectual del asesinato de Moïse. El senador John Joel Joseph, sobre el que se sospecha que jugó un importante papel en la operación, sigue prófugo. Según el jefe de la Policía haitiana, el magnicidio se preparó con antelación en República Dominicana, con la participación destacada de Sanon, Joseph y otro ciudadano haitiano-estadounidense, James Solages, que también fue detenido. Aunque todavía quedan muchos interrogantes por resolver sobre las causas y circunstancias que rodean el asesinato del presidente haitiano, la Policía baraja la hipótesis de que el operativo buscaba derrocar y reemplazar en el poder a Moïse. Sin embargo, algunas de las personas que participaron en las reuniones en las que presuntamente se orquestó el magnicidio niegan que el objetivo de las mismas fuera el derrocamiento (y menos el asesinato) de Moïse, y que, en cambio, el objetivo de tales encuentros era preparar un gobierno de transición (liderado por Sanon) una vez que Moïse se viera forzado a dimitir por la presión de las



MESOAMÉRICA Y REGIÓN ANDINA

protestas sociales y de la oposición política. Tampoco se conocen detalles exactos sobre las empresas privadas de seguridad colombianas que habrían reclutado al grupo de sicarios. Según ha trascendido a la prensa, este grupo logró incursionar en la residencia de Moïse haciéndose pasar por un operativo de la Administración de Control de Drogas de EEUU (DEA, por sus siglas en inglés).

En el marco de la crisis política y social que atraviesa el país, en las semanas siguientes al asesinato de Moïse se incrementaron las incógnitas sobre la sucesión de Moïse y sobre el rumbo político del país. La Constitución establece que en caso de ausencia de presidente, sea la presidencia del Tribunal Supremo quien asuma el cargo, pero el presidente de dicha institución falleció por COVID-19 poco antes del asesinato de Moïse. Otro factor que añade incertidumbre a la actual situación política es el hecho de que Moïse, en su último decreto presidencial firmado dos días antes de morir, nombrara como nuevo primer ministro a Ariel Henry en sustitución de Claude Joseph. Sin embargo, en tanto en cuanto Henry no pudo tomar posesión del cargo, Joseph se había mantenido como primer ministro desde el 7 de julio. El llamado Core Group (conformado por Naciones Unidas, la OEA, la UE y los Gobiernos de EEUU, Francia, España, Brasil, Alemania y Canadá) hizo un llamamiento para que Ariel Henry formara gobierno incluso lo antes posible con el objetivo de convocar elecciones presidenciales y legislativas en el menor plazo posible. En paralelo, ocho de los 10 senadores en activo apoyan la designación del presidente del Senado, Joseph Lambert, como presidente interino del país. A mediados de julio, Henry, Joseph y Lambert celebraron una reunión con la mediación de una delegación de EEUU, pero según señalaron varios medios de comunicación no se logró ningún acuerdo significativo. Así las cosas, también a mediados de julio se celebró una reunión con numerosos grupos de la sociedad civil y representantes de la oposición para conformar un foro de diálogo que, sin la injerencia de países extranjeros, pueda discutir acerca del rumbo político del país. En esta línea, el Gobierno de República Dominicana emitió un comunicado en el que expresaba su respaldo al principio de no injerencia en los asuntos internos de Haití y en el que apoyaba el inicio de un gran diálogo nacional para solventar la crisis política que atraviesa el país y a la vez disminuir los altos niveles de violencia registrados en los últimos tiempos. A finales de julio trascendió que finalmente sería Ariel Henry quien sería nombrado como primer ministro. Claude Joseph también formará parte del nuevo ejecutivo (como canciller), mientras que otros ministros de la anterior administración mantendrán el cargo. El nuevo Gobierno también integrará a representantes de la oposición (como un dirigente de Fanmi Lavalas, el partido creado por Aristide), así como a personas procedentes de la

sociedad civil o del ámbito empresarial. Henry había sido ministro en el gobierno de Michel Martelly y había formado parte del llamado “consejo de sabios” que se creó en 2004 tras el derrocamiento del ex presidente Jean-Bertrand Aristide con el objetivo de nombrar un primer ministro para dirigir el país.

- El País, “[Historia de un magnicidio: las horas finales del presidente de Haití](#)”, *El País*, 11 de julio de 2021.
- BBC, “[Jovenel Moïse: 4 incógnitas sobre el asesinato del presidente de Haití](#)”, *BBC*, 16 de julio de 2021.
- The New York Times, “[¿Cómo es el final de esto?: la trama del asesinato del presidente de Haití crece](#)”, *The New York Times*, 15 de julio de 2021.
- Herald, “[Las potencias extranjeras y la ONU dan la espalda al primer ministro de Haití](#)”, *Herald*, 18 de julio de 2021.
- El Periódico, [Ariel Henry, nuevo primer ministro de Haití tras el asesinato de Moïse](#), *El Periódico*, 20 de julio de 2021.
- Diario Libre, [La comunidad internacional insta a Ariel Henry a formar Gobierno en Haití](#), *Diario Libre*, 17 de julio de 2021.

HONDURAS

Los homicidios se incrementan en más de un 16% en el primer semestre de 2021

Según datos oficiales, el número de homicidios en el primer semestre del 2021 se incrementó en más de un 16% respecto del mismo periodo del año anterior. En 2020 se registraron en Honduras 3.496 homicidios, un 14,3 % menos que en 2019, con un total de 4.082. Entonces, varias voces señalaron que la principal causa para la disminución de la tasa de homicidios en Honduras (y en toda Centroamérica) fueron las medidas de restricción de la movilidad vinculadas a la contención de la pandemia de la COVID-19. A pesar de la clara disminución en los niveles de violencias registrados en Honduras en 2020, el país siguió siendo el país de Centroamérica con una tasa de homicidios más alta (37,5 cada 100.000 habitantes). En cuanto a las cifras de 2021, varias organizaciones de derechos humanos señalan que el 65% de las muertes violentas en el país son responsabilidad del crimen organizado. El Gobierno también responsabiliza de la violencia en el país a la disputa de territorios para la distribución de drogas y el cobro de extorsiones a las pandillas Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18. En esta línea, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el incremento de homicidios en Honduras en 2021 se concentró en los barrios y colonias controladas por dichas maras. Desde una perspectiva más agregada, los departamentos en los que se ha registrado un mayor incremento en la



MESOAMÉRICA Y REGIÓN ANDINA

tasa de homicidios son Francisco Morazán, Cortés, Atlántida, Yoro y Olancho.

- Forbes Centroamérica, “Los homicidios subieron un 16.2 % en primer semestre de 2021 en Honduras”, *Forbes Centroamérica*, 16 de julio de 2021.
- El Heraldo, “¿Honduras es el país más violento de Centroamérica?”, *El Heraldo*, 23 de junio de 2021.

MÉXICO

Un informe de Naciones Unidas sostiene que los cárteles de la droga han intensificado su actividad tras el punto álgido de la pandemia

El Informe Mundial de Droga 2021, publicado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), señala que los cárteles de la droga mexicanos han reanudado e intensificado sus actividades con mucha rapidez tras el punto álgido de la pandemia y que durante la misma lograron suplantar algunas de las funciones del Estado y a la vez expandir su base social a través de actividades como la distribución de alimentos y de ayudas sociales. Según UNODC, el mercado de la droga, como otras actividades económicas legales, estuvo paralizado durante la pandemia, pero se ha recuperado de forma muy rápida y ya ha alcanzado los niveles anteriores a la pandemia. Según el informe, recientemente se ha identificado la aceleración de ciertas dinámicas que ya se habían identificado previamente al inicio de la pandemia, como el incremento de cargamentos grandes de drogas ilícitas (evitando así el transporte de droga en pequeñas cantidades a través de las llamadas “mulas”), el refuerzo de las rutas terrestres

y marítimas o el incremento de aviones privados para el tráfico de drogas (para compensar la suspensión de varias conexiones aéreas).

A pesar de que la pandemia dificultó el tráfico de droga, UNODC sostiene que esta no tuvo un impacto significativo en su producción. En cuanto a la cocaína, su producción se vio interrumpida en la fase inicial de la pandemia, pero ya en la segunda mitad del 2020 se recuperaron los niveles de producción de cocaína en los tres principales países productores: Bolivia, Colombia y Perú. En cuanto al opio, tampoco se observó una disminución significativa en los tres países que lo producen en un 95%: Afganistán, México y Myanmar. En México, sin embargo, se registró un descenso del 23% en la superficie de cultivo de opio entre julio de 2018 y junio de 2019 en comparación con un periodo anterior. En esta línea, el informe señala que México fabrica ilegalmente importantes cantidades de fentanilo y que cárteles como el de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación introducen enormes cantidades de este producto a EEUU.

- Infobae, “Cómo los cárteles de México se recuperaron de la pandemia: los resultados del Informe Mundial de Drogas 2021”, *Infobae*, 25 de junio de 2021.
- El Economista, “Grupos criminales suplantarón funciones del Estado mexicano durante la pandemia de Covid-19, según informe de la ONU”, *El Economista*, 24 de junio de 2021.
- El País, “La ONU alerta de la rápida recuperación del negocio del narcotráfico tras el parón de la covid-19”, *El País*, 24 de junio.
- El Economista, “Cárteles expanden sus bases sociales”, *El Economista*, 25 de junio.



TEMAS GLOBALES

DESPLAZAMIENTO FORZADO: ACNUR confirma un nuevo récord de personas desplazadas forzosamente a nivel global pese al contexto de COVID-19 y el cierre de fronteras

INSEGURIDAD ALIMENTARIA: Alertan sobre aumento exponencial del hambre en el mundo a causa de la pandemia, conflictos y el cambio climático

MENORES Y CONFLICTOS: La pandemia exacerba la vulnerabilidad de niños y niñas en contextos de conflicto armado, según informe de la ONU

DESPLAZAMIENTO FORZADO

ACNUR confirma un nuevo récord de personas desplazadas forzosamente a nivel global pese al contexto de COVID-19 y el cierre de fronteras

Durante 2020 se produjeron nuevos y masivos desplazamientos forzados de población a causa de conflictos, vulneraciones de derechos humanos y persecución, elevando a 82,4 millones el total de personas que habían tenido que abandonar sus hogares al finalizar el año. Según los datos del informe anual de ACNUR publicado en junio, más de un 1% de la población mundial había tenido que desplazarse forzosamente o 1 entre 95 personas, frente a 1 cada 159 en 2010. Estas cifras confirman la tendencia de crecimiento exponencial del desplazamiento forzado a nivel global observada en la última década, aunque los análisis apuntan a una desaceleración en el último año a causa de los impactos de la pandemia. Las restricciones de movilidad a causa del coronavirus supusieron mayores dificultades para las personas que intentaron abandonar sus países en busca de un sitio más seguro para ellas y/o sus familias y ante el cierre de fronteras, en algunos casos favorecieron la opción por rutas más peligrosas o el recurso a mafias. ACNUR destaca que en el momento de mayores restricciones de movilidad a nivel mundial, entre mayo y junio de 2020, casi 170 de los 195 países cerraron sus fronteras de manera total o parcial. Las poblaciones desplazadas se vieron directamente afectadas por la pandemia, que amplificó sus vulnerabilidades y las expuso a mayores retos debido a la inseguridad alimentaria y económica. El informe de ACNUR también recoge impactos derivados del cambio climático vinculados a la falta de recursos y la transformación de hábitats en espacios crecientemente inhabitables.

Cabe destacar que a nivel mundial niños y niñas fueron uno de los grupos de población más afectados por los desplazamientos forzados de población, representando el 42% del total a pesar de que a nivel global solo constituyen un 30% de la población. Respecto a las situaciones de desplazamiento forzado internacional bajo mandato de ACNUR, los casos más significativos

fueron Siria (6,8 millones), Venezuela (4,9), Afganistán (2,8) y Sudán del Sur (2,2).

- ACNUR/UNHCR, *Global Trends. Forced Displacement in 2020*, junio de 2021.

INSEGURIDAD ALIMENTARIA

Alertan sobre aumento exponencial del hambre en el mundo a causa de la pandemia, conflictos y el cambio climático

Varios informes advierten sobre las graves consecuencias que ha tenido en el último año la conjunción de pandemia, conflictos y cambio climático, al incrementar significativamente la inseguridad alimentaria a nivel global. El informe anual de Naciones Unidas *The State of Food Security and Nutrition in the World*, publicado en julio y elaborado por varias agencias de la ONU, alerta que la COVID-19 en confluencia con estos y otros factores han provocado que uno de cada diez habitantes en el mundo afronten problemas de alimentación o desnutrición. A nivel general, en el período 2010-2015 ya se había identificado un aumento preocupante del hambre en el mundo, pero lo ocurrido en 2020 ha disparado el fenómeno tanto en términos absolutos como proporcionales. Si en 2019 la cifra de personas afectadas por hambre a nivel mundial era de 8,4%, el porcentaje alcanzó un 10% en 2020. Según las estimaciones, entre 720 y 811 millones de personas padecieron hambre en 2020, entre 118 y 161 millones más que en 2019. Se trata de un incremento de 18% respecto al año anterior, el mayor crecimiento interanual de los últimos 15 años. Más de la mitad de la población que padecía hambre se encontraba en Asia (418 millones), más de un tercio en África (282 millones) y aproximadamente el 8% (60 millones) en América Latina.

Se estima que el porcentaje de población afectada por inseguridad alimentaria severa se acercó a 12% de la población mundial en 2020, equivalentes a 928 millones de personas, 148 millones de personas más que en 2019. En 2020 hubo 2.370 millones de



TEMAS GLOBALES

personas que no tuvieron acceso a una alimentación adecuada y que en varios momentos del año tuvieron dificultades para alimentarse, una cifra que en 2020 se incrementó en 320 millones de personas respecto del año anterior. También se incrementó la brecha de género en cuanto a la prevalencia de inseguridad alimentaria moderada o severa, siendo 10% más alta en mujeres que en hombres en 2020, frente a un 6% en 2019. Según el informe publicado por conjuntamente por la FAO, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), Unicef, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), los factores que explican esta situación están vinculados con la recesión económica que han sufrido la gran mayoría de países del mundo (especialmente los de renta baja y media), pero también con el impacto de los conflictos armados, el cambio climático o las medidas de contención de la pandemia, que, a modo de ejemplo, generaron problemas de abastecimiento de productos en las ciudades o afectaron a la capacidad de pequeños agricultores de hacer llegar sus productos a los mercados, provocando ello un incremento de precios de productos de primera necesidad. De igual modo, el incremento del desempleo provocado por la pandemia provocó un incremento significativo del número de personas que tuvo que recurrir a los comedores sociales y a los bancos de alimentos.

15

En esta misma línea, un informe de OXFAM también publicado en julio, subraya que las muertes por hambre son muy superiores a los fallecimientos por la pandemia. En *The Hunger Virus Multiplies*, la ONG enfatiza que 11 personas mueren cada minuto en el mundo a causa del hambre provocada por conflictos, COVID-19 y cambio climático, una ratio que supera las siete personas por minuto como consecuencia de la pandemia. Su diagnóstico, por tanto, también identifica los conflictos, las interrupciones económicas motivadas por la pandemia y la creciente crisis climática como elementos clave que han empeorado los niveles de pobreza y hambre en el mundo, agravando situaciones preexistentes y creando nuevos epicentros de hambrunas a nivel global. Según las cifras de OXFAM, un total de 155 millones de personas en 55 países afrontaban situaciones de inseguridad alimentaria extrema, 20 millones más que en 2019. Las peores crisis por hambrunas en 2020 se localizaron en Yemen, RDC, Afganistán, Venezuela, Sahel (África Occidental), Etiopía, Sudán del Sur, Siria, Sudán y Haití, según el *Global Report for Food Crises*. ONGs como Acción Contra el Hambre también han subrayado que en torno a un 60% de la población afectada por situaciones de hambre se encuentran en países donde el hambre se utiliza como arma de guerra. En este contexto, Naciones Unidas también ha advertido que la COVID-19 tendrá consecuencias a largo plazo en la seguridad alimentaria a escala mundial, dificultando

el logro de conseguir la erradicación del hambre para el año 2030.

- Al Jazeera, “Every minute, 11 people die of hunger: OXFAM”, *Al Jazeera*, 9 de julio 2021.
- Ara, “El covid dispara el hambre en el mundo un 18%”, *ARA*, 12 de julio de 2021
- FAO, IFAD, UNICEF, WFP and WHO. *The State of Food Security and Nutrition in the World 2021. Transforming food systems for food security, improved nutrition and affordable healthy diets for all*. Rome, FAO, 2021.
- Global Network against Food Crises, *The 2021 Global Report on Food Crises (GRFC 2021)*, WFP, abril 2020.
- OXFAM, *The Hunger Virus Multiplies: Deadly Recipe of Conflict, COVID-19 and Climate Accelerate World Hunger*, OXFAM Media Briefing, 9 de julio 2021.
- Pamela Falk, “U.N. warns 10% of world undernourished as hunger “shot up” amid COVID pandemic”, *CBS News*, 12 de julio 2021.
- Radio Francia Internacional, “El COVID-19 amenaza con agravar de manera duradera el hambre en el mundo (FAO)”, *RFI*, 12 de julio de 2021

MENORES Y CONFLICTOS

La pandemia exacerba la vulnerabilidad de niños y niñas en contextos de conflicto armado, según informe de la ONU

La última edición del informe anual de la ONU sobre la situación de menores en conflictos armados señala que las vulneraciones graves contra niños y niñas se mantienen en niveles alarmantemente altos y concluye que la pandemia ha incrementado su vulnerabilidad ante prácticas como secuestros, reclutamiento, violencia sexual o ataques contra escuelas y hospitales. El informe, que abarca el período de enero a diciembre de 2020, identifica 26.425 violaciones graves que afectaron a 19.379 menores, de los cuales casi tres cuartas partes niños (14.097), una cuarta parte niñas (4.993) y a 289 menores cuyo sexo se desconoce. Las vulneraciones más frecuentes fueron el reclutamiento y uso de 8.521 menores –85% de ellos eran niños–, la matanza (2.674) y mutilación (5.748) de 8.422 menores y la denegación de acceso humanitario, con más de 4.000 incidentes. Asimismo, se identificó un aumento sustantivo en los secuestros, que crecieron un 90% respecto al año anterior, y de las violaciones y otras formas de violencia sexual, que también se incrementaron en un 70%. Las niñas fueron las más afectadas por los hechos de violencia sexual, constituyendo un 98% de las víctimas, según el informe. Los países más afectados por vulneraciones graves contra menores se produjeron en Afganistán, Siria, RDC, Somalia y Yemen. Asimismo, el texto subraya que los ataques en escuelas y hospitales continuó siendo



TEMAS GLOBALES

muy elevado y que se constató un aumento en el uso de centros educativos por parte de actores armados, ya que su cierre temporal como parte de las medidas adoptadas para evitar la propagación de la COVID-19 favoreció que fueran ocupadas y utilizadas para fines militares. El documento también destaca que las medidas adoptadas para impedir la propagación del virus afectaron el trabajo de organismos como la ONU para

dar seguimiento y protección a los menores en conflictos.

- Secretario General de la ONU, *Los niños y los conflictos armados, informe del Secretario General de la ONU*, 6 de mayo de 2021.
- UN, "Grave violations against children in conflict 'alarmingly high', latest UN report reveals", *UN News*, 21 de junio de 2021.



Esta publicación está sujeta a una licencia de Creative Commons. Se permite la reproducción total o parcial, la distribución y la comunicación pública de la obra, siempre que no sea con fines comerciales, y siempre que se reconozca la autoría de la obra original. No se permite la creación de obras derivadas.

El observatorio online bimensual sobre COVID-19, conflictividad armada y construcción de paz pone especial atención a las regiones prioritarias para la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) en línea con su plan director (2019-2022). El contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva de la Escola de Cultura de Pau y no refleja la opinión de la ACCD ni de la Generalitat de Catalunya.

èc̃p̃ escola de
cultura de pau

UAB
Universitat Autònoma
de Barcelona

Escola de Cultura de Pau
Parc de Recerca, Edifici MRA,
Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra (España)
+34 93 586 88 42
pr.conflictes.escolapau@uab.cat
escolapau.uab.cat

Con el apoyo de:

ACCD Agència Catalana
de Cooperació
al Desenvolupament

**Generalitat
de Catalunya**

@escolapau
EscolaPau